

Euskadi como preludeando la libertad de todos los presos, y el fin del confinamiento de los exiliados vascos en la isla de Yeu, cuestión que día a día contabilizaba nuevas protestas.

Pero es quizá en el terreno político donde con más claridad puede apreciarse el cambio de clima. La reunión celebrada en Bilbao por las seis fuerzas que apoyan a Julio Jáuregui (ANV, DCV, PCE, PSOE, PNV y PSPE), a una semana de la celebrada en Bayona por el Gobierno vasco en el exilio, ha contribuido a restablecer la confianza en la oposición a pesar de lo indefinido del comunicado final.

Se constata, de otro lado, el deseo del Gobierno vasco de no obstaculizar la negociación y de apoyar a Jáuregui sin reservas en la coyuntura actual, reservándose un protagonismo de segunda fila en las líneas de actuación que ha venido manteniendo a lo largo de las cuatro últimas décadas. El lendakari Leizaola entiende que la institución debe ser depositaria de una legitimidad adquirida en las urnas, asumiendo una imagen de dignidad y caución democrática hasta que el pueblo vasco pueda determinar su futuro. "No podemos reconocer algo que sustituya a lo surgido en el treinta y seis, si no es por votación popular", dijo Leizaola quizá no teniendo en cuenta que el Gobierno vasco sigue adoleciendo de una falta de principio que limita su representatividad originaria y que se refiere a la exclusión de los comunistas en plena guerra fría.

Ya en la arena de la discusión entre las fuerzas que apoyan a Jáuregui, la clave del debate parece centrarse, a pesar de lo diverso y complejo de los problemas planteados, en la negociación del tema de las nacionalidades. Despejada la incógnita Carrillo —los comunistas vascos han sido tajantes en este punto: "Si Suárez considera que el "status" de las nacionalidades es negociable, que lo diga públicamente y que no pretenda utilizar una coartada como la presencia de Carrillo en la comisión, y por otra parte, podría participar en cualquier otra. El problema es la negociación y no la presencia de este u otro señor en cualquiera de las comisiones"—, la oposición se afana en perfilar unos presupuestos que no sean rechazables apriorísticamente por el poder, que garanticen un cierto control en el proceso electoral y que dejen abierta la puerta a un futuro planteamiento autonómico. Difícil conjunción de extremos que fue resuelto en el comunicado final con el acuerdo de "instruir a don Julio Jáuregui para que plantee el restablecimiento de las facultades autonómicas de que ha gozado históricamente nuestro pueblo, así como la creación de una Diputación General de Euskadi, con participación de todas las fuerzas políticas vascas, que entre otras facultades, tenga las adecuadas para

garantizar la neutralidad del proceso electoral".

Es precisamente en la cuestión del restablecimiento de las facultades autonómicas donde siguen manifestándose diferentes interpretaciones, desde una brumosa reinstauración foral que preconizan algunos, pasando por el Estatuto de Estella, el Estatuto de 1936 con su Gobierno, o la elaboración de una nueva carta que regule las relaciones con el poder central. Por eso, a pesar del deseo compartido por el pueblo vasco y la totalidad de fuerzas democráticas de lograr un poder vasco, todo queda por hacerse en ese camino.

Sería en la proposición de crear una "Diputación General de Euskadi", donde habría que situar el arranque de la senda hacia una solución del problema. Bajo esa fórmula semántica de "Diputación General", parece hallarse la intención de instrumentalizar un organismo en el que tuvieran lugar todas las fuerzas vascas de oposición y que funcionando como "colegio electoral" garantizara la transparencia electoral, pero no parece que su papel se limitaría a las elecciones. Cada día se oye hablar más de "pacto institucional" y de "pacto autonómico". Aún sin explicitarse, se apunta que correspondería a toda la oposición democrática, a partir de las elecciones, un esfuerzo común por elaborar una Constitución que respecto a la cuestión nacional y regional estableciera mecanismos abiertos a la regulación de sus relaciones entre sí y con el Estado central, cosa que desde las nacionalidades debería ser impulsada por los esfuerzos mancomunados de todas las fuerzas partidarias de la autonomía. En este sentido, se pronunciaba el líder de ANV, Valentín Solagaitua, en un reciente mitin celebrado en Algorta.

De todos modos, mientras llega la negociación con Suárez, pocos son los que se atreven a acusar a la oposición de maximalismo en sus planteamientos autonómicos, cuestión en la que a todas luces parece imponerse una línea más dúctil y a largo plazo, en contraste con la reivindicación de amnistía firmísimamente mantenida como no negociable.

También en el terreno político se espera con mucho interés el florido marzo de congresos. Tras largos meses de trabajosa preparación el al Partido Nacionalista Vasco aborda las últimas fases de su asamblea nacional; el CC Socialista de Euskadi (PSOE) reunirá 1.400 delegados e invitados los días 12, 13 y 14 de marzo en Donostia en un histórico primer congreso; ESB anuncia congreso para los días 18, 19 y 20 de marzo en Bilbao en el que se discutirán veinte ponencias y "Eusko Karlista Alderdia" también se dispone a ajustar su maquinaria política y organizativa.

Esa celeridad en poner orden dentro de las casas se ha visto

complementada esta semana con la creación de la plataforma "Herriko" (del Pueblo), organismo que anunció su presentación pública para el próximo día 28 y que agrupa doce grupos considerados hasta hace poco tiempo irreconciliables. Se trata de las siglas incluidas en la "Kordinadora Abertzale Sozialista" y de MCE, ORT, PT, ES y otros de menor entidad.

Al parecer, la iniciativa correspondió el KAS, MC, EKA y "Eusko Sozialistak", quienes después de seis meses de arduas negociaciones, han desembocado en la elaboración de un programa que, en líneas generales, difiere muy poco de las soluciones que propugna el conjunto de la oposición: libertades democráticas; amnistía total; esta-

blecimiento de un régimen de autonomía; reforma fiscal... Pero lo que más ha sorprendido del acuerdo es precisamente que fuerzas etiquetadas de "abertzales" y "sucursalistas" se hayan puesto de acuerdo en un proyecto común, superando falsas divisorias. Por eso, a pesar de la negativa de los carlistas a suscribir el documento, del escepticismo con que ha sido acogida la plataforma por las fuerzas de mayor peso específico y de la corta vida que algunos le pronostican, el ver alejarse el fantasma "abertzale-sucursalista", mantenido hoy casi exclusivamente por ESB, contribuye a distender el áspero terreno de la política vasca, en estos días de retoños primaverales. ■ PERU ERROTETA.

## GALICIA

# As Encrobas: un lento despojo

**M**AIS si non temos luz!, contestaron los campesinos cuando los directivos de Lignitos de Meirama intentaron hacerles ver las ventajas de la energía eléctrica y la satisfacción que se siente cuando se llega a casa y se enciende la luz... Meses después, agotada ya la débil paciencia de la empresa y por el muy legal y socorrido procedimiento de la expropiación forzosa, los campesinos no han podido hacer otra cosa que oponerse, con sus medios y su indignación, al despojo. Con el conflicto surgido con las fuerzas del orden, solicitadas por los intereses empresariales, se ha deducido, además de los heri-

dos y detenidos, que el pueblo gallego sigue consciente de que la defensa de sus propios derechos le obliga a la respuesta contundente, desesperada.

Fenosa, la compañía eléctrica dueña de vidas y haciendas en Galicia, tiene el proyecto —que cuenta ya con todos los permisos oficiales— de construir en el término de Cerceda (La Coruña) una central térmica de 500 megavatios aprovechando la existencia allí mismo de un yacimiento de lignito a cielo abierto. A través de su filial, Lignitos de Meirama, Fenosa necesita explotar este yacimiento a razón de 3.800.000 toneladas/año para "in-





La Guardia Civil, en las tierras de As Encrobas: la amenaza de ocupación ha movilizó a todo el pueblo.

dustrializar Galicia" y suplir el "déficit" que ya presenta entre consumo y producción de energía eléctrica. Para todo esto se ha intentado, a lo largo de meses, la compra de los terrenos a los vecinos de As Encrobas a precios irrisorios, eludiendo otras responsabilidades. Los campesinos han pedido mejores precios —a cambio de perder sus tierras y sus medios de vida—, y han exigido que se les traslade el pueblo a un lugar de similares condiciones. El desenlace del desprecio de Lignitos y de la firme postura de los vecinos han sido la toma de los terrenos de parte de la fuerza pública y contra la resistencia dramática de sus legítimos dueños, al intentar aplicarse la ocupación.

Numerosos pueblos de la provincia de La Coruña aún no tienen luz; la energía que se produciría esquilmando los recursos de todo el pueblo gallego alimentará las fábricas del capitalismo autóctono o no, que a su vez sistematiza el expolio de la tierra, el mar y el paisaje de Galicia. La colonización descarada

—como señalan la mayoría de los comunicados hechos públicos por grupos políticos y entidades populares, con este motivo— no va orientada al desarrollo auténtico, sino al hundimiento progresivo del pueblo gallego. El caso del asalto a As Encrobas, como culminación de la torpe política arrastrada por Fenosa respecto a Galicia, no va a quedar en una humillación más. Xeito Democrático advierte que los hechos de As Encrobas "reavivan las profundas heridas existentes" en lugar de invitar a la convivencia democrática. La entidad cultural O Facho denuncia que se presente a la opinión pública como bien social lo que es "sencillamente un negocio privado".

Comunicados de condena, paros y manifestaciones de solidaridad están avivando la conciencia de secular humillación del campesino gallego; esta provocación salvaje e inoportuna no tardará en volverse en contra del grupo Fenosa, que tanta animadversión se ha ganado en los últimos años.

Toda esta situación, de por sí tensa, se ha agravado al límite con la muerte, el viernes 18, de un joven estudiante de la Universidad Laboral de La Coruña en el instante en que intentaba colocar en el tejado de uno de los pabellones del centro una pancarta de solidaridad con los campesinos. El muchacho, que acababa de salir de un encierro junto con otros cincuenta compañeros en la capilla de la Universidad, recibió la descarga mortal de un cable de 15.000 voltios que cruza las instalaciones del centro. Parece ser que el propio director de la Universidad Laboral había solicitado repetidamente de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A. (Fenosa) que retirara ese cable eléctrico.

El nuevo elemento de peso en el conflicto radica en la intervención del arzobispo de Santiago, que, recién llegado de Roma e impresionado por la muerte del muchacho, declaró que todo podía haberse evitado si se hubieran tenido en cuenta sus objeciones expuestas oportunamente ante las autoridades. Don Angel Suquía recomendó nue-

vamente el recurso al diálogo entre todas las partes e insistió en que no debían valorarse exclusivamente los aspectos económicos y materiales, sino también los afectivos y humanos.

Mientras el cuerpo del joven estudiante era trasladado a su pueblo natal de León, en La Coruña oficiaba un funeral el párroco de Sésamo, don Ramón Valcárcel, que aca-

baba de ser puesto en libertad tras su retención por solidarizarse con los campesinos de As Encrobas.

La presión popular en forma de manifestaciones de solidaridad habidas en distintos lugares de Galicia durante todo el fin de semana, ha llevado, por el momento, a la congelación de las medidas expropiadoras y al inicio de negociaciones. ■ PEDRO COSTA MORATA.

## MEDIDAS ECONOMICAS

# El Gobierno no se decide

**L**ARGAS colas de vehículos esperaban turno en las gasolineras: se decía que la súper iba a subir dos o tres pesetas por litro. El "Telediarlo" de las ocho y media registró una inusitada audiencia. Se esperaban decisiones importantes y se esperaban ansiosamente: desde hace algunos meses es cada vez más claro que la economía ha dejado de ser una preocupación de especialistas. Pues bien, una vez más, la justa ansiedad de treinta y cinco millones de personas se vio frustrada: el Consejo de Ministros del viernes 18 de febrero, de donde hablan de salir unas medidas económicas para hacer frente a la crisis, estuvo reunido diez horas y no dio ninguna solución. Y un sorprendente aplazamiento fue lo único que se pudo sacar en claro.

No se ponen de acuerdo los señores ministros. No saben qué hacer. O a lo mejor es que no pueden hacer nada. Cinco reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, diez horas de Consejo de Ministros, más algunas horas ocupadas por el tema en anteriores Consejos, no han servido sino para dar, con toda la pomposidad habitual, unas líneas generales de manual de segundo de Económicas. Y a esperar al martes.

Es para ponerse a llorar. Llevamos meses escuchando severas premoniciones, desde todos los lados y opiniones políticas, de que la crisis económica es tan grave que podría paralizar el proceso político, de que es necesario un pacto previo a las elecciones, de que a lo mejor es necesario adelantar la consulta electoral debido a la crisis... Alguien, y no sólo Lassuén, ha llegado a proponer Gobiernos de salvación nacional para hacer frente al tema.

Reactivación moderada, crecimiento del producto interior bruto del 3,5 por 100: en ese tema, y a duras penas según parece, el Gobierno se ha puesto de acuerdo. No era para menos, habida cuenta de las necesidades del período pre-electoral. Los más elementales manuales de política enseñan que en etapas como ésta no se pueden proponer férreos programas de

austeridad. Y aunque algunos ministros no se mostraran partidarios de tamañas euforias, entre ellos parece ser que el titular de Hacienda, al final esta línea se ha impuesto. No es, desde luego, para echar las campanas al vuelo: ese 3,5 es exactamente la mitad de la media del ritmo de crecimiento de los últimos años de prosperidad anteriores a la crisis, superior tan solo en 1,5 puntos a lo logrado en 1976; y es inferior en más de un punto a la media prevista para 1977 en los países de la OCDE.

El Gobierno ha aprobado un cuadro macroeconómico cuyos capítulos fundamentales se desconocen: no se sabe qué previsiones ha hecho para el consumo privado, ni para el consumo público, ni para las importaciones. Tan solo se menciona que la formación bruta de capital crecerá un 3 por 100 y que las exportaciones lo harán en un 6 por 100. Lo demás es secreto. Como también lo es una columna fundamental que suele aparecer en todos estos cuadros macroeconómicos: la previsión del crecimiento de los precios en cada uno de los capítulos. Y, en este caso, lo más interesante sería saber a costa de qué elevación de los precios al consumo se va a conseguir ese 3,5 por ciento de crecimiento del producto interior bruto. Los más optimistas no bajan del 20 por 100 y, como ya citamos en anteriores ocasiones en TRIUNFO, algunas empresas multinacionales han hecho sus cálculos pensando en por lo menos un 25 por 100. Eso explicaría el silencio del Gobierno al respecto.

Tras plantear un cuadro macroeconómico, al que le faltan tres patas de cinco, el Gobierno anuncia "sus" medidas:

Sector público: Inversión adicional de 50.000 millones de pesetas (por encima de las cantidades incluidas en un presupuesto aprobado hace menos de un mes) y crecimiento del crédito oficial en un 25 por 100 respecto a las cantidades de 1976. Esa es una de las pocas decisiones cuantificadas en el programa del Gobierno, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿de dónde van a salir esos 50.000 millones, que tampoco es una cantidad como

